

DILEMAS SOCIALES DE LA TRANSICION

David Ibarra
23 de junio de 2005

La economía mexicana progresó rápidamente y casi sin tregua en el medio siglo que media entre 1930 y 1980. La producción se multiplicó 16 veces; la población se cuadruplicó; el ingreso por habitante se expandió también cuatro veces. La ocupación subió con celeridad reduciendo a la población marginada y dando lugar a importantes transferencias de mano de obra de los sectores de baja a los de alta productividad.

Después la economía camina con lentitud, se han generado desequilibrios enormes en el mercado de trabajo; el lento ascenso a la productividad se traduce en escollo a la competitividad externa y a la mejora del ingreso de las familias. Entre 1950 y 1980, el producto por habitante creció al 3.3% anual y de ese último año a 2003 apenas al 0.7%. Según el INEGI, la población activa suma 42.7 millones de personas. De ellas, sólo el 62% obtienen ingresos salariales. El resto (casi 40%) está compuesto por trabajadores informales, campesinos, ocupados por cuenta propia y desocupados. Aún dentro de los asalariados se reproducen grandes desigualdades; muchos no cuentan con prestaciones sociales, el 60% labora sin contratos o con contratos temporales para no mencionar la disparidad de remuneraciones entre las empresas grandes y las pequeñas o entre los trabajadores calificados y los desprovistos de calificaciones.

La productividad del trabajo de 1930 a 1980 ascendió consistentemente alrededor del 2%-3% anual, después se hace negativa para luego repuntar débilmente a comienzos de los noventas (0.9%) y luego descender o estancarse hasta 2003. Según Aspe, la productividad manufacturera --sobre la base de horas

trabajadas-- se reduce más del 50% entre 1994 y 2003. A su vez, Bancomer estima que el producto incremental por hora trabajada en la industria manufacturera pasó del 6.4% al 3.1% de compararse los períodos 1993-1998 y 1999-2003.

Por su parte, las estimaciones de Hernández-Laos sitúan la tasa de ascenso de la productividad del trabajo en 3.2% entre 1960-1981 en -0.3% entre 1981-1987 y de 0.3% de 1987 a 2002. A todas luces, México pierde la mejor vía, --la de la productividad-- para mejorar el bienestar de su población, a la vez que resulta superado por gran número de países cuya eficiencia económica evoluciona mucho más favorablemente.

Desde otra perspectiva, las desigualdades siguen caracterizando a México como un país de pobreza y riquezas extremas. Con algunas ganancias recientes, los pobres se sitúan entre el 40% y el 50% de la población. El coeficiente de Gini rebasa los 0.5 puntos, apuntando a una altísima concentración de ingresos y consumos. Conforme a las Naciones Unidas el 10% de los más ricos de la población retiene más del 40% del producto en tanto que el 10% más pobre sólo tiene el 1% de ese ingreso.

Quiérase o no, la vida ciudadana del país resulta medularmente escindida. Los acuerdos sociales nacidos de la Revolución han quedado rotos o son inoperantes. Por lo menos la mitad de la población está marginada, no tiene influencia en las decisiones fundamentales de gobierno y sociedad. Ciudadanos que gozan de derechos plenos, conviven con otros que no tienen voz alguna en los asuntos nacionales, ni vías de mejorar su condición.

No se ha sabido conducir de modo más humano el cambio de estrategia económica, ni reconstruir apropiadamente el sistema político. Incuestionablemente hay avances: se ha desterrado el autoritarismo, el sistema

electoral es transparente, el comercio exterior florece y han desaparecido los males de la inflación galopante. Con todo, el crecimiento flaquea, las tensiones sociales proliferan, la criminalidad nos ahoga y resulta imposible atender demandas ciudadanas no sólo legítimas sino indispensables para erradicar la creciente descomposición social. Los partidos políticos parecen incapaces de formar alianzas que destraben al Poder Legislativo del Ejecutivo e impulsen al país en torno a estrategias transicionales eficaces de globalización. Proliferan los conflictos entre poderes que obligan a la Suprema Corte de Justicia a dictar sentencias en cuestiones políticas que mejor podrían atenderse por la vía del acuerdo o del consenso.

El cuasiestancamiento económico que padecemos no sólo repercute directamente en las condiciones sociales del presente, sino que auspicia la gestación de problemas de envergadura que ya asoman en el horizonte nacional. Véase más de cerca el problema de las redes de seguridad social.

En México se han seguido dos vertientes para mejorar el bienestar de la población y combatir la pobreza. La primera que cubre buena parte de la posguerra se enderezó al objetivo de multiplicar las oportunidades de empleo, de fortalecer la capilaridad social por la vía de transferir mano de obra marginada a actividades de mayor productividad y de crecer con rapidez. Conforme a esa lógica, las redes de protección social se especializaron a cubrir los riesgos de los trabajadores ocupados, la enfermedad, la invalidez o los ingresos insuficientes en la vejez. El rápido ascenso de la producción y una estructura poblacional joven, facilitaron el que se adoptase el sistema de beneficios definidos en el retiro y de solidaridad intra e intergeneracional. Es decir las aportaciones de los estratos de trabajadores jóvenes, sufragaban las pensiones de los jubilados y también se dan transferencias del personal de mayores ingresos a los menos favorecidos. Sobre

esas bases se crearon en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social y en 1960 el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicios del Estado.

Dos acontecimientos tornan difícil y, según algunos, inviable, el sostenimiento sin reformas de los sistemas nacionales de seguridad social. El primer escollo es demográfico: el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida hacen que el peso de las contribuciones que recae en las generaciones jóvenes resulte excesivo, sea cubierto por los trabajadores, los empresarios o los contribuyentes. El segundo factor es económico: la lentitud o estancamiento del producto y empleo en el sector moderno de la economía, amplifica enormemente las repercusiones financieras desfavorables de la evolución demográfica.

Durante dos décadas y media, el país apenas ha registrado desarrollo económico (0.7% anual per cápita), acentuándose simultáneamente los problemas de la marginación y de la insuficiencia de los recursos estatales para atender el bienestar y los riesgos de la población. Frente a esa situación se emprenden varias acciones. De un lado, se adopta una política microsocioal enderezada a combatir la difusión de la pobreza. Al efecto se diseña el programa Progresá (1995) que permitió aliviar la insuficiencia de ingresos de la población excluida, al paso que se resguardaba la astringencia presupuestaria, la desregulación y otras medidas de la estrategia neoliberal. Así, más que cubrir riesgos generales de la población --enfermedad, cesantía, muerte-- las acciones públicas se focalizaron a aliviar la pobreza y en particular, a fortalecer la educación, nutrición y salud de la población marginada.

De otra parte, se cambió radicalmente la estructura de las pensiones: se pasó de un sistema basado en beneficios definidos y solidarios manejado por el

Estado, a otro de cuentas individuales con administración privada en que cada trabajador obtiene ingresos jubilatorios determinados por sus aportaciones más los intereses y las ganancias conexas (intereses y dividendos). Así se eliminó parte de los sustanciales riesgos financieros del IMSS que pasaron a ser asumidos por los propios trabajadores. Por supuesto, el cambio no fue gratuito, el Estado ha debido hacerse cargo de los ya pensionados y de los que están o estaban próximos a hacerlo con un costo estimado entre 0.5% y 1% anual del producto que se prolongará bastantes años.

La transformación del sistema de pensiones no ha sido completa, subsisten regímenes solidarios. Además, hay otros problemas: los déficit actuariales del ISSSTE, de las entidades federativas, de empresas paraestatales y las vinculadas a los trabajadores del propio Seguro Social ascienden a cerca del 90% del producto. Aun así, apenas el 37% de la fuerza de trabajo está amparada (2003) en alguno de los sistemas de seguridad social; los derechos jubilatorios no son trasladables (portables) entre los sistemas, causando serios perjuicios a muchos de los que cambian de empleo; los seguros de enfermedades y maternidad tienen fondeo insuficiente (IMSS, ISSSTE); las edades de jubilación paradójicamente se reducen frente a la ampliación de la esperanza de vida (64 años en 1975 y 75 en 2000).

Aparte de los casos e insuficiencias mencionados, hay oposiciones entre los sistemas establecidos o estableciéndose. Los fondos de la vivienda de los trabajadores se administran de manera solidarista --quienes más ganan subsidian los intereses de los menos favorecidos en el Infonavit--; pero el grueso de las pensiones se ha privatizado y se lleva en cuentas individuales. Progresá --hoy Oportunidades-- focaliza rigurosamente la ayuda a las familias pobres; pero "el

seguro popular" intenta beneficiar sin mayor focalización a la población excluida de los sistemas de seguridad social.

De lo anterior es fácil inferir la necesidad imperativa de modificar a fondo los sistemas nacionales de seguridad social, a fin de combatir mejor riesgos y pobreza y de beneficiar a mayores porcentajes de la población. Asimismo, habría que cuidar los regímenes de pensiones que reconocen problemas serios en vías de agravarse y cuya solución exige de acuerdos fundamentales entre gobierno, trabajadores y empresarios. Por otro lado, sin la voluntad y decisión de imprimir velocidad al crecimiento nacional, resultará casi imposible, tanto política como financieramente, encontrar soluciones que dejen de segregar a los grupos más débiles o peor organizados de la sociedad. Comienza a cobrar fuerza la idea de unir una reforma fiscal equitativa y desarrollista con un sistema de financiamiento de mayor alcance de la seguridad social. México necesita servicios universales de salud, accesos ampliados a la educación, abatir la desnutrición infantil, esto es, dar mayor prelación a la formación del capital humano, base de la competitividad en un mundo globalizado.